

UNIDAD DE DOCUMENTACION
 DE INFORMACION

AREA ESPECIALIZADA
 DE LAS MUJERES

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
 APROBACIÓN DEL CONVENIO NUMERO 158 SOBRE
 LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO
 POR INICIATIVA DEL EMPLEADOR

Asamblea Legislativa:

Cumpliendo con las obligaciones contraídas por el Gobierno de Costa Rica como miembro de la Organización Internacional del Trabajo, sometemos a consideración y eventual aprobación el Convenio Internacional número 158 sobre "La terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador".

Dicho Convenio fue adoptado en la Sexagésima Octava Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (Ginebra) 1982, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y lo remitimos a ese Parlamento en virtud que el artículo 19 de su Constitución establece la obligación de someterlo a las autoridades competentes, en este caso la Asamblea Legislativa, al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas.

Así pues, de conformidad con el espíritu de la legislación que rige la materia, artículos 103 al 107 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 13 del Reglamento de Reorganización y Racionalización de ese Ministerio, Decreto N° 20601-TSS del 5 de agosto de 1991 y del Convenio Internacional de la OIT N° 144 sobre "Consultas Tripartitas para promover la aplicación de las normas internacionales del Trabajo", ratificado por Costa Rica mediante Ley N° 6571 de 23 de abril de 1981, el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en su oportunidad sometió a consulta del Consejo Superior de Trabajo, órgano basado en el tripartismo igualitario, su propuesta en relación al Convenio número 158.

Para el estudio de la consulta presentada por el señor Ministro y de sus propuestas, el Consejo Superior de Trabajo integró una Comisión Técnica tripartita, con representación gubernamental, de empleadores y de trabajadores, para su estudio y análisis.

Cada una de las representaciones integrantes de dicha Comisión emitieron sus propuestas, las cuales para el instrumento que nos ocupa fueron las siguientes:

"CONVENIO N° 158: SOBRE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR INICIATIVA DEL EMPLEADOR"

Las representaciones presentes, empleador y gubernamental, acuerdan recomendar la no ratificación del Convenio, apoyando la posición externada originalmente al Consejo Superior de Trabajo por el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, mediante DM-1483-94 del 19 de setiembre de 1994.

En este sentido, vista la finalidad principal del Convenio en examen de proteger a los trabajadores contra la terminación de la relación de trabajo sin causa justificada, a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o fundamentada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio, las representaciones presentes, empleador y gubernamental, consideran que no es conteste con lo dispuesto al respecto en nuestra legislación laboral, específicamente en el artículo 85 inciso d), del Código de Trabajo, que faculta al patrono a dar por terminado el contrato de trabajo con responsabilidad patronal por su "propia voluntad".

Se adiciona que la facultad patronal para rescindir unilateralmente la relación laboral con responsabilidad patronal, deviene del artículo 63 de la Constitución Política, el cual reza lo siguiente:

"Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación.

Los miembros presentes consideran importante informar al Consejo Superior de Trabajo que el presente Convenio ha sido ratificado por 17 países, de los cuales solamente uno es americano (Venezuela)."

NOTA: En la sesión donde se conoció dicho informe, se deja constancia que estuvieron ausentes la representación de los trabajadores, quienes no se excusaron.

El Consejo Superior de Trabajo conoció las referidas propuestas de cada una de las representaciones que integran la pluricitada Comisión, durante la sesión N° 15 celebrada el 3 de mayo de 1995 y se acordó lo siguiente:

"Artículo 2:1).—Sometidos a conocimiento del Consejo Superior de Trabajo los siguientes convenios Internacionales, números 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 168, 173, 158, 175, 149, 152, 172, el Consejo Superior de Trabajo ACUERDA POR UNANIMIDAD, recomendar ante las autoridades competentes la aprobación de los siguientes convenios:

- Convenios 160: Sobre Estadísticas del Trabajo, Convenio 162: Sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad, Convenio 170: Sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, Convenio 173: Sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador - Se acepta su parte II relativa a la protección de los créditos laborales por medio de un privilegio, debiendo consignarse esta

elección en una declaración que acompañará la ratificación, según lo estipulado respecto en el artículo 3 del instrumento en examen, Convenio 175: Sobre el trabajo a tiempo parcial.

...Los representantes de los trabajadores dejan constando su recomendación para la aprobación del resto de convenios internacionales mencionados: 161, 163, 164, 165, 166, 171, 168, 158, 149, 152, 172."

Por lo tanto, sometemos a la consideración de los señores diputados el proyecto de ley del Convenio de la OIT numero 158 sobre "La terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador" que nos permitimos adjuntar, debidamente certificado por el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

APROBACIÓN DEL CONVENIO SOBRE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR INICIATIVA DEL EMPLEADOR

Artículo 1º.—Apruébase el Convenio número 158 sobre La terminación de la Relación Trabajo por iniciativa del Empleador, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su sexagésima octava reunión, celebrada en Ginebra en 1982, cuyo texto dice:

"CONVENIO SOBRE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR INICIATIVA DEL EMPLEADOR"

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Convenio 158

CONVENIO SOBRE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR INICIATIVA DEL EMPLEADOR

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 2 de junio de 1982, en su sexagésima octava reunión;

Habiendo tomado nota de las normas internacionales que contiene la Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1963;

Habiendo tomado nota de que desde la adopción de la Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1963, se han registrado novedades importantes en la legislación y en la práctica de numerosos Estados Miembros relativas a las cuestiones abarcadas por dicha Recomendación;

Considerando que en razón de esas novedades es oportuno adoptar nuevas normas internacionales en la materia, habida cuenta en particular de los graves problemas que se plantean en esta esfera como consecuencia de las dificultades económicas y de los cambios tecnológicos sobrevenidos durante los últimos años en gran número de países;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, cuestión que constituye el quinto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio, adopta, con fecha 22 de junio de mil novecientos ochenta y dos, el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982:

PARTE I

Métodos de aplicación, campo de aplicación y definiciones

Artículo 1º.—Deberá darse efecto a las disposiciones del presente Convenio por medio de la legislación nacional, excepto en la medida en que esas disposiciones se apliquen por vía de contratos colectivos, laudos arbitrales o sentencias judiciales, o de cualquier otra forma conforme a la práctica nacional.

Artículo 2º—

1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica y a todas las personas empleadas.
2. Todo Miembro podrá excluir de la totalidad o de algunas de las disposiciones del presente Convenio a las siguientes categorías de personas empleadas:
 - a) Los trabajadores con un contrato de trabajo de duración determinada o para realizar determinada tarea.
 - b) los trabajadores que efectúen un periodo de prueba o que no tengan el tiempo de servicios exigido, siempre que en uno u otro caso la duración que se haya fijado de antemano y sea razonable.
 - c) Los trabajadores contratados con carácter ocasional durante un periodo de corta duración.
3. Se deberán prever garantías adecuadas contra el recurso a contratos de trabajo de duración determinada cuyo objeto sea eludir la protección que prevé el presente Convenio.

4. En la medida en que sea necesario, y previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, la autoridad competente o el organismo apropiado de cada país podrá tomar medidas para excluir de la aplicación del presente Convenio o de algunas de sus disposiciones a ciertas categorías de personas empleadas cuyas condiciones de empleo se rijan por disposiciones especiales que en su conjunto confieran una protección por lo menos equivalente a la que prevé este Convenio.
5. En la medida en que sea necesario, y previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, la autoridad competente o el organismo apropiado de cada país podrá tomar medidas para excluir de la aplicación del presente Convenio o de algunas de sus disposiciones a otras categorías limitadas de personas empleadas respecto de las cuales se presenten problemas especiales que revistan cierta importancia habida cuenta de las condiciones de empleo particulares de los trabajadores interesados o de la dimensión o naturaleza de la empresa que los emplea.
6. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá enumerar, en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que someta en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, las categorías que hubieren sido excluidas en virtud de los párrafos 4 y 5 del presente artículo, explicando los motivos de dicha exclusión, y deberá indicar en las memorias subsiguientes el estado de su legislación y práctica respecto de las categorías excluidas y la medida en que aplica o se propone aplicar el Convenio a tales categorías.

Artículo 3°—A los efectos del presente Convenio, las expresiones «terminación» y «terminación de la relación de trabajo» significan terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador.

PARTE II

Normas de aplicación general

SECCIÓN A

Justificación de la terminación

Artículo 4°—No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio.

Artículo 5°—Entre los motivos que no constituirán causa justificada para la terminación de la relación de trabajo figuran los siguientes:

- a) la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.
- b) ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad;
- c) presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir ante las autoridades administrativas competentes;
- d) la raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, el embarazo, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el origen social;
- e) la ausencia del trabajo durante la licencia de maternidad.

Artículo 6°—

1. La ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no deberá constituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo.
2. La definición de lo que constituye una ausencia temporal del trabajo, la medida en que se exigirá un certificado médico y las posibles limitaciones a la aplicación del párrafo 1 del presente artículo serán determinadas de conformidad con los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1° del presente Convenio.

SECCIÓN B

Procedimientos previos a la terminación o en ocasión de ésta

Artículo 7°—No deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad.

SECCIÓN C

Recurso contra la terminación

Artículo 8°—

1. El trabajador que considere injustificada la terminación de su relación de trabajo tendrá derecho a recurrir contra la misma ante un organismo neutral, como un tribunal, un tribunal del trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro.

2. Si una autoridad competente ha autorizado la terminación, la aplicación del párrafo 1 del presente artículo podrá variar de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.
3. Podrá considerarse que el trabajador ha renunciado a su derecho de recurrir contra la terminación de su relación de trabajo si no hubiere ejercido tal derecho dentro de un plazo razonable después de la terminación.

Artículo 9°—

1. Los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio estarán facultados para examinar las causas invocadas para justificar la terminación de la relación de trabajo y todas las demás circunstancias relacionadas con el caso, y para pronunciarse sobre si la terminación estaba justificada.
2. A fin de que el trabajador no esté obligado a asumir por su sola cuenta la carga de la prueba de que su terminación fue injustificada, los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del presente Convenio deberán prever una u otra de las siguientes posibilidades, o ambas:
 - a) incumbirá al empleador la carga de la prueba de la existencia de una causa justificada para la terminación, tal como ha sido definida en el artículo 4 del presente Convenio;
 - b) los organismos mencionados en el artículo 8° del presente Convenio estarán facultados para decidir acerca de las causas invocadas para justificar la terminación habida cuenta de las pruebas aportadas por las partes y de conformidad con los procedimientos establecidos por la legislación y la práctica nacionales.
3. En los casos en que se invoquen para la terminación de la relación de trabajo razones basadas en necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio los organismos mencionados en el artículo 8° del presente Convenio estarán facultados para verificar si la terminación se debió realmente a tales razones, pero la medida en que esos organismos estarán facultados también para decidir si esas razones son suficientes para justificar la terminación deberá determinarse por los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1° de este Convenio.

Artículo 10.—Si los organismos mencionados en el artículo 8° del presente Convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la relación de trabajo es injustificada y si en virtud de la legislación y la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada.

SECCIÓN D

Plazo de preaviso

Artículo 11.—El trabajador cuya relación de trabajo vaya a darse por terminada tendrá derecho a un plazo de preaviso razonable o, en su lugar, a una indemnización, a menos que sea culpable de una falta grave de tal índole que sería irrazonable pedir al empleador que continuara empleándolo durante el plazo de preaviso.

SECCIÓN E

Indemnización por fin de servicios y otras medidas de protección de los ingresos

Artículo 12.—

1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, todo trabajador cuya relación de trabajo se haya dado por terminada tendrá derecho:
 - a) A una indemnización por fin de servicios o a otras prestaciones análogas, cuya cuantía se fijará en función, entre otras cosas, del tiempo de servicios y del monto del salario, pagaderas directamente por el empleador o por un fondo constituido mediante cotizaciones de los empleadores; o
 - b) A prestaciones del seguro de desempleo, de un régimen de asistencia a los desempleados o de otras formas de seguridad social, tales como las prestaciones de vejez o de invalidez, bajo las condiciones normales a que están sujetas dichas prestaciones; o
 - c) A una combinación de tales indemnizaciones o prestaciones.
2. Cuando el trabajador no reúna las condiciones de calificación para tener derecho a las prestaciones de un seguro de desempleo o de asistencia a los desempleados en virtud de un sistema de alcance general, no será exigible el pago de las indemnizaciones o prestaciones mencionadas en el párrafo 1°; apartado a), del presente artículo por el solo hecho de que el trabajador no reciba prestaciones de desempleo en virtud del apartado b), de dicho párrafo.
3. En caso de terminación por falta grave podrá preverse la pérdida del derecho a percibir las indemnizaciones o prestaciones mencionadas en el párrafo 1°, apartado a), del presente artículo por los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1° del presente Convenio.

PARTE III

Disposiciones complementarias sobre la terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos

SECCIÓN A

Consulta de los representantes de los trabajadores

Artículo 13.—

1. Cuando el empleador prevea terminaciones por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos:
 - a) proporcionará a los representantes de los trabajadores interesados, en tiempo oportuno, la información pertinente, incluidos los motivos de las terminaciones previstas, el número y categorías de los trabajadores que puedan ser afectados por ellas y el período durante el cual habrían de llevarse a cabo dichas terminaciones;
 - b) de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, ofrecerá a los representantes de los trabajadores interesados, lo antes posible, una oportunidad para entablar consultas sobre las medidas que deban adoptarse para evitar o limitar las terminaciones y las medidas para atenuar las consecuencias adversas de todas las terminaciones para los trabajadores afectados, por ejemplo, encontrándoles otros empleos.
2. La aplicación del párrafo 1° del presente artículo se podrá limitar, mediante los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1° del presente Convenio, a los casos en que el número de trabajadores cuya relación de trabajo se prevea dar por terminada sea por lo menos igual a una cifra o a un porcentaje determinados del personal.
3. A los efectos del presente artículo, la expresión «representantes de los trabajadores interesados» se aplica a los representantes de los trabajadores reconocidos como tales por la legislación o la práctica nacionales, de conformidad con el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971.

SECCIÓN B

Notificación a la autoridad competente

Artículo 14.—

1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, el empleador que prevea terminaciones por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos las notificará lo antes posible a la autoridad competente, comunicándole la información pertinente, incluida una constancia por escrito de los motivos de las terminaciones previstas, el número y las categorías de los trabajadores que puedan verse afectados y el período durante el cual habrían de llevarse a cabo dichas terminaciones.
2. La legislación nacional podrá limitar la aplicabilidad del párrafo 1 del presente artículo a los casos en que el número de trabajadores cuya relación de trabajo se prevea dar por terminada sea por lo menos igual a un número o a un porcentaje determinados del personal.
3. El empleador notificará a las autoridades competentes las terminaciones a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo con un plazo mínimo de antelación a la fecha en que se procederá a las terminaciones, plazo que será especificado por la legislación nacional.

PARTE IV

Disposiciones finales

Artículo 15.—Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 16.—

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 17.—

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 18.—

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de a segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 19.—El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 20.—Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 21.—

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
 - a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 17, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
 - b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

- a) Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 22.—Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

Artículo 2°—Rige a partir de su publicación.

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA.—Victor Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Especial de Relaciones Internacionales.

San José, 10 de mayo del 2000.—1 vez.—C-90300.—(31435).

**DECRETOS**

N° 28678-H

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Considerando:

1°—Que el numeral b. inciso 6 del artículo 7°, de la Ley de Presupuesto Ordinario para el 2000, N° 7952 del 7 de diciembre de 1999, se establece:

“Facúltese al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, realice lo siguiente:

Traslade previa autorización de la Contraloría General de la República, los sobrantes de las partidas de servicios personales y sus correspondientes cargas sociales de los programas presupuestarios y los regímenes de pensiones cargadas al presupuesto nacional, al servicio de la deuda pública, a las partidas para pagar pensiones y prestaciones legales con cargo al Gobierno central o al pago por servicios personales en los programas presupuestarios que muestren faltantes. Dicho traslado podrá efectuarse también a la inversa”.

2°—Que la Norma 7 del artículo 7°, de la Ley de Presupuesto Ordinario para el 2000, N° 7952 del 7 de diciembre de 1999, se establece que:

“Autorízase al Poder Ejecutivo para que, con la finalidad de adecuar los recursos presupuestarios a la programación, a partir del segundo trimestre del año, mediante decreto ejecutivo preparado por la Oficina de Presupuesto Nacional y previa autorización de la Contraloría General de la República, se ordenen dentro de un mismo programa o subprograma, trasposos entre los gastos autorizados en la presente ley. Asimismo sin modificar el monto de los recursos asignados al programa, podrán reordenarse trasposos por medio de la creación de un nuevo tipo de gasto, cuando resulte indispensable para conseguir los objetivos y las metas de producción establecidos por cada programa o subprograma presupuestario.”

3°—Que se hace necesario dar el contenido económico para financiar el incentivo denominado “Operaciones de Alto Riesgo”, para los funcionarios de la Fuerza Pública, que abnegadamente trabajan para el bienestar de todos los costarricenses, mismo que fue creado mediante STAP N° 0683-200, del 12 de abril del 2000, en acuerdo firme número 5878 de la Autoridad Presupuestaria en sesión extraordinaria N° 3-2000, celebrada el 10 de abril del 2000.

4°—Que el Ministerio de Seguridad Pública, solicitó mediante oficio DGA-432-2000, del 25 de abril del 2000 la confección del presente decreto.

5°—Que la Contraloría General de la República dio su aprobación al presente decreto mediante oficio N° 05085 del 25 de mayo del 2000. **Por tanto,**

DECRETAN:

Artículo 1°—Modifícase el artículo 2° de la Ley N° 7952 del 7 de diciembre de 1999, en la forma que se indica a continuación: